



Del conflicto con las antiguas FARC a la seguridad integral: Transformaciones en la política de seguridad en Colombia

Mayor (EJC) Rubencindo Silva Fernández

Artículo para optar al título profesional:

Magister en Seguridad y Defensa

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Mayor (EJC) Rubencindo Silva Fernández
Identificación	: 72298789
Programa académico	: Maestría en Seguridad y Defensa
Tutor metodológico	: Omar Vanegas Rincón
Tutor temático	: Luis Alejandro Méndez Vélez
Fecha de entrega	: 7 de agosto de 2025
Extensión	: 0000 palabras

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-No Comercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Del conflicto con las antiguas FARC a la seguridad integral: Transformaciones en la política de seguridad en Colombia

From the conflict with the former FARC to comprehensive security: Transformations in security policy in Colombia

Rubencindo Silva Fernández

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: Este artículo examina la transformación en la política de seguridad de Colombia, posterior a los acuerdos de paz del 2016 con las antiguas FARC. El enfoque de esta lectura se desplaza de la “Seguridad Democrática”, a un modelo de seguridad integral que incluye dimensiones políticas, económicas, militar y social. Dentro de este enfoque metodológico cualitativo y explicativo se busca entender el impacto y las garantías de las instituciones en la estabilidad territorial posterior al conflicto con esos grupos armados.

Existe un vacío en la participación de los actores políticos, que aún no logran efectivamente la seguridad integral, y que ha llevado a la evolución de un conflicto que tiene la participación principal de una economía ilícita.

Sugerencia y recomendaciones en el nuevo contexto que vive el país, analizando la participación y efectividad de las instituciones gubernamentales, el apoyo político a las FFMM para optimizar la aplicación de la seguridad integral.

Palabras clave: Seguridad; instituciones gubernamentales; Fuerzas Militares; grupos armados.

Abstract: Article examines the transformation in Colombia's security policy following the 2016 peace agreements with the former FARC. The focus of this article shifts from "Democratic Security" to a comprehensive security model that includes political, economic, military, and social dimensions. This qualitative and explanatory methodological approach seeks to understand the impact and guarantees of institutions on territorial stability following the conflict with these armed groups.

There is a gap in the participation of political actors, who have not yet effectively achieved comprehensive security, and this has led to the evolution of a conflict primarily influenced by an illicit economy.

Suggestions and recommendations are presented in the new context the country is experiencing, analyzing the participation and effectiveness of government institutions and political support for the armed forces to optimize the implementation of comprehensive security.

Keywords: Security; government institutions; military forces; armed groups.

Introducción

El conflicto armado interno en Colombia, prolongado por más de cinco décadas, constituye uno de los fenómenos más complejos y prolongados de la historia nacional. La confrontación entre el Estado, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y economías ilícitas dejó profundas consecuencias sociales, institucionales y territoriales: desplazamiento forzado, fractura del tejido social, pérdida de confianza en las instituciones y debilitamiento del control estatal (CNMH, 2013; González, 2004). La firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 marcó un punto de inflexión histórico al abrir la posibilidad de transitar hacia una concepción renovada de la seguridad y la paz territorial (Alto Comisionado para la Paz, 2016; Kroc Institute, 2023).

Antes del Acuerdo, la política de seguridad colombiana estuvo dominada por un paradigma tradicional centrado en la confrontación militar. Durante la política de Seguridad Democrática (2002–2010), el énfasis recayó en la expansión del pie de fuerza, la ofensiva contra los grupos armados y la recuperación del control territorial (Uribe Vélez, 2003; Restrepo, 2009). Si bien esta estrategia logró avances en materia de seguridad ciudadana, no abordó las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la exclusión social o el abandono rural. En el escenario del posacuerdo, se hizo evidente la necesidad de ampliar el concepto de seguridad para incluir dimensiones humanas, económicas y sociales, acorde con las transformaciones del entorno global y con las exigencias del proceso de paz (Comisión de la Verdad, 2022; FIP, 2020).

En ese marco emergió el modelo de seguridad integral, que redefine la seguridad como una acción estatal coordinada destinada a garantizar derechos, promover desarrollo territorial, fortalecer la gobernanza y reducir las economías ilícitas (Ministerio de Defensa Nacional, 2022; González Posso, 2020). Este enfoque se alinea con los postulados de la seguridad humana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994), la cual sitúa al individuo en el centro de las políticas públicas y plantea la necesidad de protegerlo frente a amenazas sociales, económicas y ambientales. Asimismo, coincide con el paradigma de la seguridad ampliada de Buzan (1991), que considera que la estabilidad nacional depende de factores políticos, económicos, sociales, militares y ecológicos. De este modo, la seguridad integral busca no solo controlar la violencia, sino también transformar las condiciones estructurales que la originan.

El estudio de esta transición reviste una importancia crucial para comprender cómo el Estado colombiano ha intentado consolidar la paz y la estabilidad territorial. La transformación del enfoque de seguridad redefine el papel de las Fuerzas Militares, que ahora asumen funciones de estabilización, reconstrucción social y protección de comunidades, además de las tradicionales tareas de defensa nacional (Patiño, 2019; FIP, 2020). Sin embargo, la persistencia de economías ilícitas, la reaparición de grupos armados disidentes, la expansión del narcotráfico y la débil presencia institucional en zonas rurales demuestran que el cambio de paradigma aún enfrenta limitaciones significativas (FIP, 2023; ONU, 2024).

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo general evaluar de qué manera la implementación del modelo de seguridad integral ha incidido en la reducción de amenazas y en la consolidación de la estabilidad territorial en el escenario posterior al Acuerdo de Paz de 2016. De forma específica, se propone analizar cómo dicho acuerdo

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

redefinió la política de seguridad nacional; comparar la estrategia colombiana con modelos de seguridad aplicados en otros países con experiencias de posconflicto, como Sierra Leona, los Balcanes, Irlanda del Norte y El Salvador; y finalmente, formular propuestas sustentadas en evidencia empírica que contribuyan a optimizar la aplicación del enfoque de seguridad integral, fortaleciendo la presencia del Estado, la coordinación institucional y la confianza ciudadana en los territorios históricamente afectados por la violencia.

Marco teórico

La comprensión del modelo de seguridad integral en Colombia exige analizar la evolución conceptual del término “seguridad” y las teorías que lo sustentan. Desde una perspectiva histórica, la seguridad se entendió bajo el paradigma realista, centrado en la defensa de la soberanía estatal frente a amenazas externas e internas. Este enfoque, heredero de la tradición clausewitziana, concebía la seguridad como un asunto estrictamente militar y la guerra como la prolongación de la política por otros medios (Clausewitz, citado en Buzan, 1991). En Colombia, esta visión se consolidó con la política de Seguridad Democrática, implementada durante la primera década del siglo XXI, la cual privilegió el control territorial mediante la superioridad militar y la ofensiva contra grupos insurgentes (Uribe Vélez, 2003; Restrepo, 2009).

Sin embargo, la realidad del conflicto colombiano demostró que la violencia no podía entenderse únicamente como un fenómeno bélico. A partir de las teorías de Barry Buzan (1991) y Ole Wæver (1995), surge la noción de seguridad ampliada o integral, que introduce nuevas dimensiones al análisis: la política, la económica, la social, la ambiental y la militar. De acuerdo con Buzan, la estabilidad de un Estado depende tanto de la defensa militar como del bienestar ciudadano y la cohesión social. Esta ampliación conceptual permitió

comprender que la seguridad no es solo ausencia de guerra, sino también la existencia de condiciones que garanticen el desarrollo humano sostenible.

De manera complementaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) propuso el concepto de seguridad humana, el cual desplazó el centro de atención del Estado hacia el individuo. Este enfoque identifica siete dimensiones interdependientes: la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política. En el contexto colombiano, este paradigma orienta el paso de la lógica de la confrontación hacia la construcción de confianza y la consolidación de la paz territorial. Ospina (2018) señala que la seguridad humana debe traducirse en políticas públicas que garanticen oportunidades y protección, particularmente en regiones afectadas por la exclusión y la pobreza.

Con base en estos postulados, el modelo de seguridad integral colombiano busca armonizar la defensa nacional con la protección ciudadana y el desarrollo territorial. El Ministerio de Defensa Nacional (2022) lo define como una estrategia multidimensional que combina el uso legítimo de la fuerza con la gestión institucional, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, la seguridad no se reduce a eliminar amenazas, sino que busca transformar las condiciones estructurales que las generan (González Posso, 2020).

Asimismo, la literatura reciente reconoce que las economías ilícitas —narcotráfico, minería ilegal, contrabando— constituyen una variable estructural del conflicto y un desafío permanente para la consolidación del Estado (Gutiérrez, 2003; Pécaut, 2017; UNODC, 2018). Estas economías no solo financian la violencia, sino que crean estructuras paralelas de poder que socavan la autoridad legítima y perpetúan la inseguridad. Por ello, la seguridad

integral debe incorporar políticas que combinen acciones coercitivas con estrategias de desarrollo rural, inclusión económica y justicia social.

Finalmente, el papel de las Fuerzas Militares se redefine en este contexto. Patiño (2019) y la Fundación Ideas para la Paz (2020) destacan su tránsito hacia un modelo multimisión, en el que las capacidades militares se orientan también a la estabilización, la reconstrucción social, la protección ambiental y la asistencia humanitaria. Este proceso implica un desafío doctrinal y operativo que exige fortalecer la educación militar, la coordinación civil-militar y la legitimidad institucional frente a la ciudadanía.

En suma, el marco teórico de esta investigación se fundamenta en tres pilares interrelacionados: la evolución conceptual de la seguridad desde un enfoque militar a uno multidimensional; la incorporación del paradigma de la seguridad humana como eje central de las políticas públicas; y la articulación de las Fuerzas Militares y las instituciones civiles para enfrentar amenazas híbridas en un contexto de posconflicto. Este sustento teórico permite analizar de manera crítica los alcances y limitaciones del modelo de seguridad integral en Colombia, así como su potencial para contribuir a una paz estable y duradera.

Metodología.

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, adecuado para abordar las problemáticas desde el conflicto a la contextualización determinada de la implementación del modelo de seguridad integral en Colombia tras el Acuerdo de Paz de 2016. Este enfoque metodológico resulta pertinente dado que permite explorar de forma profunda las dinámicas institucionales, sociales, culturales y políticas que influyen en la consolidación de la seguridad en territorios en posconflicto, teniendo en cuenta que estos son

los que se encuentran más afectados con la violencia entre los grupos armados (GAO) y la fuerza pública en sí misma. A través del análisis documental, se examinan fuentes primarias y secundarias que permiten no solo comprender los significados y relaciones entre los distintos actores e instituciones, sino también establecer conexiones causales y generar estrategias fundamentadas en evidencia. La dimensión comparativa del enfoque permite contrastar el caso colombiano con experiencias internacionales relevantes (como Sierra Leona, los Balcanes o El Salvador), facilitando así la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas aplicables al contexto nacional que se desarrollan en cada uno de los objetivos de la investigación. Lo anterior genera un diseño metodológico que permite interpretar, explicar y proponer con sustento empírico alternativas viables para optimizar la aplicación de la seguridad integral en Colombia.

La unidad de análisis de este estudio está conformada por los modelos de política de seguridad integral aplicados en contextos de posconflicto. Estos modelos se entienden como marcos normativos, institucionales y operativos que buscan transformar las condiciones estructurales que generan inseguridad y violencia. En particular, el análisis se centra en el caso colombiano, prestando especial atención a instrumentos clave como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2022), y los lineamientos derivados del Acuerdo Final de Paz.

Para el procesamiento de la información, se emplearon técnicas cualitativas de codificación temática y comparación entre casos, siguiendo una aproximación de análisis de contenido. Este método permitió identificar el diseño e implementación de políticas, y explorar las dimensiones operativas de cada modelo de seguridad. El resultado de esta

sistematización se sintetizó en una matriz comparativa que destaca las diferencias y similitudes entre la experiencia colombiana y otros modelos internacionales en términos de conceptualización, ejecución y resultados observados.

Esta metodología facilita una evaluación crítica sobre el nivel de integralidad y efectividad del modelo colombiano en el escenario post-acuerdo, al tiempo que aporta una perspectiva enriquecida mediante la comparación con experiencias internacionales. Así, se generan insumos valiosos para proponer ajustes estratégicos, operativos e institucionales, orientados a fortalecer una seguridad que priorice a las personas, promueva la paz territorial y avance en la transformación estructural del conflicto.

Evaluación del impacto del modelo de seguridad integral en la reducción de amenazas en las zonas de conflicto post- FARC. Y examinar el impacto de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en la redefinición de la política de seguridad nacional.

Este primer objetivo se orienta a examinar el efecto que ha tenido la implementación del modelo de seguridad integral en la reducción de amenazas persistentes en las zonas más afectadas por el conflicto armado posterior a la desmovilización de las FARC. Al mismo tiempo, se analiza de qué manera la firma del Acuerdo de Paz ha incidido en la transformación de la política de seguridad nacional, desde una perspectiva más amplia e incluyente.

Para tal fin, se utilizó como técnica central de recolección el análisis documental, a través de una revisión sistemática de fuentes diversas que permitieran comprender de forma

integral el panorama de seguridad entre 2016 y 2024. Esta revisión incluyó documentos oficiales como los planes nacionales de desarrollo, estrategias sectoriales de seguridad, reportes de seguimiento a la implementación del Acuerdo por parte de organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y el Instituto Kroc, además de investigaciones académicas, análisis de centros especializados como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y publicaciones de entidades multilaterales como el PNUD y la Unión Europea.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 representó un punto de inflexión en la política de seguridad nacional del país. Hasta entonces, la seguridad se había entendido desde una perspectiva predominantemente militar, orientada a la confrontación directa con los grupos armados ilegales bajo el paradigma de la "Seguridad Democrática", desarrollado principalmente durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta estrategia tuvo como ejes la ofensiva militar, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, y la expansión del control territorial del Estado (Hernández, 2020).

Sin embargo, la firma del Acuerdo de Paz exigió una redefinición de esta visión hacia un modelo más amplio y complejo: la seguridad integral. Este nuevo paradigma propone que la seguridad no puede depender exclusivamente del uso de la fuerza, sino que debe integrar factores políticos, sociales, económicos y ambientales. En este sentido, la seguridad integral se concibe como una herramienta para garantizar derechos, fomentar la justicia social y asegurar una presencia estatal legítima y eficaz en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado (Ospina, 2018; Comisión de la Verdad, 2022).

Esta transformación teórica ha tenido efectos prácticos significativos, como la redefinición del papel de las Fuerzas Armadas, que han debido adaptarse a un contexto donde su misión se extiende más allá del combate directo. Su labor ahora incluye el apoyo a la consolidación institucional, la protección de comunidades en procesos de reincorporación, y la coordinación con organismos civiles para garantizar condiciones de seguridad sostenible (FIP, 2020). Esta transición, sin embargo, no ha estado exenta de tensiones, ya que las amenazas persistentes como el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de disidencias armadas han puesto en jaque la consolidación del modelo de seguridad integral (Sánchez, 2021).

El análisis documental y bibliográfico sobre el conflicto colombiano evidencia que la violencia, más allá de su expresión militar, está profundamente vinculada a estructuras económicas ilegales y a dinámicas de exclusión social. Investigadores como Gutiérrez (2003) y Pizarro (1991) han demostrado cómo las guerrillas encontraron en el narcotráfico una fuente de financiamiento que transformó la naturaleza del conflicto y prolongó su duración. Además, el surgimiento de grupos paramilitares, inicialmente concebidos como respuesta a las guerrillas, añadió una nueva dimensión de violencia con intereses particulares en el control territorial y la economía ilícita.

Frente a este panorama, la implementación del Acuerdo de Paz trajo consigo mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), los cuales buscan articular la seguridad con la inversión social, la justicia y la participación comunitaria (Comisión de la Verdad, 2022; Ministerio de Defensa Nacional, 2022). Estas herramientas representan intentos concretos de

materializar la seguridad integral, pero su efectividad ha sido desigual, especialmente en regiones donde la presencia institucional sigue siendo precaria y el control lo ejercen actores armados ilegales.

De hecho, informes recientes del Kroc Institute (2023) y de la Misión de Verificación de la ONU (2024) evidencian que, aunque se han logrado avances normativos e institucionales, persisten grandes brechas en la implementación efectiva del Acuerdo. En muchas zonas, el Estado aún no ha logrado sustituir las estructuras ilegales de poder ni garantizar condiciones básicas de seguridad y desarrollo. Esta situación genera frustración en las comunidades, debilita la confianza institucional y crea condiciones para la reconfiguración de actores armados.

En síntesis, el impacto del Acuerdo de Paz en la redefinición de la política de seguridad nacional ha sido profundo en el plano conceptual, pero enfrenta enormes desafíos en su implementación práctica. Si bien la transición hacia un modelo de seguridad integral representa un avance necesario y legítimo, su sostenibilidad exige no solo decisiones políticas coherentes, sino también inversión sostenida, articulación interinstitucional y una presencia estatal efectiva en los territorios. La seguridad integral, para consolidarse como una política de Estado, debe ir más allá de la retórica y convertirse en una estrategia que transforme las condiciones estructurales que alimentan la violencia y la exclusión.

La estrategia actual con modelos de seguridad integral utilizados en otros países con conflictos similares.

El objetivo de "Comparar la estrategia actual con modelos de seguridad integral utilizados en otros países con conflictos similares" se refiere a la intención de analizar cómo el enfoque de seguridad integral adoptado por Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 se relaciona y difiere de los modelos de seguridad integral implementados en otras naciones que han enfrentado conflictos de características similares. Esta comparación busca identificar las fortalezas y debilidades, así como las posibles lecciones aprendidas de otras experiencias internacionales, para optimizar la aplicación de la seguridad integral en el contexto colombiano, que busca ir más allá de lo militar para abordar dimensiones políticas, sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta que Colombia inició una transformación conceptual de su política de seguridad, pasando de una lógica eminentemente militarista a una que, al menos en el discurso institucional, incorpora enfoques más integrales y multidimensionales, por ende al identificar elementos replicables y evaluar las oportunidades de mejora se busca hacer frente a las amenazas persistentes, tales como el narcotráfico, los grupos armados ilegales y la debilidad institucional en los territorios más afectados por el conflicto (Kroc Institute, 2021).

La Estrategia Actual de Seguridad en Colombia Post-Acuerdo de Paz

Ha transitado de un enfoque predominantemente militarista, a uno que, teóricamente, integra dimensiones más amplias, buscando la estabilización territorial, la desarticulación de

economías ilegales, el fortalecimiento institucional y la protección de los derechos humanos. Aunque el término "seguridad integral" no es un concepto unificado en la política pública colombiana de la misma manera que en otros países, la visión post-conflicto ha tendido a incorporar elementos que se alinean con este concepto.

Uno de los ejes centrales de este análisis es determinar si la estrategia colombiana cumple con los principios de la **seguridad humana**, un concepto promovido por el **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)** desde 1994, que redefine la seguridad desde la protección del Estado hacia la protección de las personas, integrando factores como salud, educación, medio ambiente, seguridad alimentaria y participación política (PNUD, 1994). Este enfoque fue aplicado exitosamente en **Sierra Leona**, donde la seguridad se vinculó con la gobernanza local, la reintegración de excombatientes y la reconstrucción social postguerra (UNDP, 2006).

Por otra parte, las experiencias de Irlanda del Norte y El Salvador muestran la importancia de articular procesos de reconciliación, reforma del sector justicia y participación comunitaria, como lo propone el modelo de peacebuilding (Lederach, 1997). En estos contextos, la paz no se logró únicamente con la desmovilización de actores armados, sino con la construcción de una "infraestructura de paz" que permitiera a los ciudadanos apropiarse de la seguridad y de la reconstrucción social.

La Escuela Superior de Guerra de Colombia (ESDEG) ha abordado en sus publicaciones y cursos la evolución de la seguridad y defensa nacional, reconociendo la multidimensionalidad de las amenazas y la necesidad de un enfoque integral. Por ejemplo, autores como el General (r) Jaime Ruiz Barrera han destacado la importancia de la seguridad

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

y defensa en un contexto de posconflicto, subrayando que "la seguridad no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de condiciones de desarrollo y bienestar" (Ruiz Barrera, J., 2017, "La Seguridad Nacional en el Posconflicto", Revista de la ESDEG, Vol. X, No. Y). Asimismo, se ha enfatizado la articulación entre la seguridad y el desarrollo, un pilar fundamental de la seguridad integral.

En Colombia, si bien se han creado mecanismos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se han implementado políticas como la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2022), el énfasis ha permanecido en el control territorial mediante la fuerza pública. En contraste, los modelos internacionales destacan la centralidad de la prevención, la confianza comunitaria y la inclusión social (Fundación Ideas para la Paz, 2023).

Sin embargo, a pesar de la retórica de integralidad, la implementación ha enfrentado desafíos significativos. La persistencia de grupos armados organizados, el narcotráfico y la debilidad institucional en algunas regiones han llevado a que la respuesta de seguridad, en la práctica, siga manteniendo un fuerte componente militar. Esto plantea la pregunta sobre qué tan "integral" es realmente la estrategia actual y si se logran abordar las causas estructurales de la violencia de manera efectiva.

Modelos de Seguridad Integral en Conflictos Similares: Perspectivas Internacionales

El concepto de seguridad integral, o seguridad humana, es ampliamente reconocido en el ámbito internacional como un enfoque que trasciende la visión tradicional de seguridad

centrada en el Estado para abarcar la protección y empoderamiento de las personas. Organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea han promovido activamente estos modelos.

1. **Enfoque de Seguridad Humana (Naciones Unidas):** Desarrollado en la década de 1990, el concepto de seguridad humana, articulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfatiza la protección de los individuos frente a amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, así como frente a perturbaciones súbitas y dolorosas en la vida cotidiana. Su aplicación en contextos de posconflicto, como en Sierra Leona o Timor Oriental, ha implicado la desmilitarización, la reintegración de excombatientes, la reconstrucción de infraestructura social y el fortalecimiento de la gobernabilidad local (PNUD, 1994, "Informe sobre Desarrollo Humano 1994: Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana"). Este modelo pone el foco en la prevención de la recurrencia de la violencia a través de la satisfacción de necesidades básicas y la construcción de capacidades locales.

Asimismo, el enfoque europeo de seguridad y desarrollo integrados, aplicado por la Unión Europea en los Balcanes, refuerza la necesidad de una acción coordinada entre seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional (European Union, 2016). Este modelo sugiere que la intervención militar debe ser un componente limitado dentro de un conjunto más amplio de herramientas que promuevan la consolidación de paz sostenible.

2. **Seguridad y Desarrollo Integrados (Unión Europea):** La Unión Europea ha promovido un enfoque integral para la gestión de crisis y la construcción de paz, que combina instrumentos militares y civiles, y articula las dimensiones de seguridad, desarrollo y gobernabilidad. En

los Balcanes, por ejemplo, la intervención de la UE ha buscado la estabilización a través de misiones de mantenimiento de la paz, pero también mediante el apoyo a la reforma del sector de seguridad, el desarrollo económico y el fortalecimiento del estado de derecho. La "Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea" (Unión Europea, 2016) subraya la interconexión entre seguridad y desarrollo, argumentando que "la paz sostenible solo puede lograrse si se abordan las causas fundamentales de los conflictos".

3. **Modelos de Consolidación de Paz (Peacebuilding):** Experiencias en países como Irlanda del Norte o El Salvador demuestran la importancia de la seguridad integral a través de procesos de peacebuilding. En estos casos, la seguridad no se limitó a la contención de la violencia, sino que se extendió a la reforma policial, la justicia transicional, la reconciliación social y la participación ciudadana. John Paul Lederach, un referente en la construcción de paz, ha enfatizado la necesidad de una "infraestructura de paz" que involucre a actores a todos los niveles de la sociedad para transformar los conflictos de manera duradera (Lederach, J. P., 1997, "Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies"). En estos contextos, la paz no se logró únicamente con la desmovilización de actores armados, sino con la construcción de una "infraestructura de paz" que permitiera a los ciudadanos apropiarse de la seguridad y de la reconstrucción social.

Dimensiones Analíticas de la Comparación.

Alcance del Concepto de Seguridad Integral.

Mientras que modelos como el de seguridad humana (propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD) promueven una visión holística que incluye

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

salud, educación, acceso al agua, empleo digno, participación política y protección frente a la violencia estructural (PNUD, 1994), en Colombia el concepto ha sido aplicado de forma parcial. La seguridad se ha entendido, mayoritariamente, como control territorial frente a actores armados ilegales, dejando en segundo plano la transformación de condiciones estructurales de exclusión social (Gutiérrez Sanín, 2018).

Institucionalidad y Coordinación Interagencial

Una característica de los modelos integrales exitosos es la existencia de estructuras interinstitucionales sólidas con competencias claras, mecanismos de coordinación y liderazgo político definido. La Unión Europea, por ejemplo, ha demostrado en los Balcanes la importancia de combinar acciones militares y civiles mediante misiones mixtas que integran seguridad, desarrollo y gobernanza (European Union, 2016). En contraste, Colombia ha enfrentado dificultades en la articulación de sus entidades territoriales y nacionales, como se evidencia en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya implementación ha sido desigual y limitada por la dispersión institucional (FIP, 2023).

Participación Comunitaria y Construcción de Confianza.

Modelos como el aplicado en Irlanda del Norte han hecho de la participación de la sociedad civil y la legitimación de las instituciones de seguridad una prioridad para consolidar la paz. Este proceso incluyó reformas policiales profundas, programas de reconciliación y un enfoque de justicia transicional inclusiva (Lederach, 1997). En Colombia, la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y el bajo nivel de participación comunitaria en el diseño e

implementación de políticas públicas de seguridad limitan la efectividad del enfoque integral (CNMH, 2020).

Transformación de las Causas Estructurales de la Violencia.

La integralidad en seguridad también implica intervenir en los determinantes sociales de la violencia. En el Salvador, por ejemplo, los programas postconflicto incluyeron reformas agrarias, programas de empleo juvenil, memoria histórica y reconocimiento de víctimas (Call, 2002). Colombia ha adoptado compromisos similares en el Acuerdo Final de Paz (como la Reforma Rural Integral), pero su implementación ha sido lenta, afectada por la falta de voluntad política, presupuesto limitado y barreras burocráticas (Kroc Institute, 2022).

Énfasis en las Causas Estructurales: Los modelos de seguridad integral insisten en abordar las causas estructurales de la violencia (pobreza, desigualdad, exclusión, débil gobernabilidad). Si bien el Acuerdo de Paz colombiano incluyó puntos sobre reforma rural integral y participación política, la implementación de estos aspectos ha sido lenta y desigual. La persistencia de factores socioeconómicos que alimentan la violencia sugiere que la estrategia de seguridad, a pesar de sus intenciones, no ha logrado transformar suficientemente las condiciones estructurales subyacentes.

Desde el enfoque metodológico, este trabajo se organiza como un estudio comparativo de casos, siguiendo las orientaciones de George y Bennett (2005). El caso central corresponde a Colombia en el contexto posterior al Acuerdo de Paz con las FARC (2016–2024), mientras que los casos de referencia son experiencias internacionales escogidas por su valor contextual y temático: Sierra Leona, Irlanda del Norte, El Salvador y los

Balcanes. Esta estrategia permite a continuación realizar un análisis interpretativo y aplicado la seguridad integral en distintos escenarios de posconflicto, lo que facilita reconocer tanto los elementos comunes como las diferencias clave entre ellos. A partir de ese análisis, es posible extraer enseñanzas útiles para fortalecer el modelo colombiano en materia de seguridad y construcción de paz.

Tabla 1. Comparación entre la Estrategia Colombiana de Seguridad Integral y Modelos Internacionales en Contextos de Posconflicto

Criterio de Comparación	Colombia (Post-Acuerdo FARC)	Sierra Leona (ONU - Seguridad Humana)	Balcanes (UE - Seguridad y Desarrollo Integrados)	Irlanda del Norte / El Salvador (Peacebuilding)
Enfoque Conceptual	Transición parcial hacia la seguridad integral. Énfasis en control territorial y desarticulación de grupos ilegales.	Seguridad centrada en las personas. Protección frente a amenazas básicas y reconstrucción social.	Visión integral Estado-sociedad. Articulación entre seguridad, desarrollo y derechos.	Enfoque comunitario. Reconstrucción del tejido social y transformación de conflictos.

<p>Coordinación Institucional</p>	<p>Fragmentación y superposición institucional. Avances con PDET, pero falta articulación efectiva.</p>	<p>Coordinación liderada por ONU y agencias locales. Reintegración de excombatientes y gobernanza local.</p>	<p>Intervención civil-militar coordinada por la UE. Enlace entre instituciones nacionales y europeas.</p>	<p>Participación interinstitucional, con inclusión de sociedad civil, partidos y ONG.</p>
<p>Participación Ciudadana y Apropiación Local</p>	<p>Débil. Baja confianza en instituciones y limitada apropiación comunitaria de las políticas de seguridad.</p>	<p>Promoción activa de participación local. Creación de estructuras comunitarias postguerra.</p>	<p>Fortalecimiento del Estado de derecho con participación comunitaria en justicia y policía.</p>	<p>Inclusión de víctimas, comités ciudadanos, iglesias y excombatientes en procesos de reconciliación.</p>
<p>Atención a causas estructurales de la violencia</p>	<p>Lento avance en reforma rural, inclusión política y reducción de desigualdades. Persisten</p>	<p>Rehabilitación económica, acceso a servicios básicos y programas de</p>	<p>Enfoque de desarrollo económico y social como base para la estabilización.</p>	<p>Políticas de memoria, verdad, justicia y educación para la paz. Inclusión económica.</p>

	factores estructurales.	educación y salud.		
Énfasis operativo (preventivo vs. reactivo)	Predomina un enfoque reactivo. Persistencia del uso militar como respuesta principal.	Enfoque preventivo con base en necesidades humanas. Intervención temprana.	Preventivo y estabilizador. Misiones de paz, reforma institucional y cooperación al desarrollo.	Preventivo, centrado en la reconstrucción del contrato social y resolución de conflictos.
Resultados en términos de consolidación de paz	Paz parcial y frágil. Persisten amenazas de disidencias, crimen organizado y vacíos de autoridad estatal.	Paz sostenida. Reducción de violencia y fortalecimiento de capacidades locales.	Avances importantes en integración política y reconstrucción institucional.	Alta resiliencia. Reducción de violencia armada y legitimación de procesos políticos.

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (1994), European Union (2016), Lederach (1997), FIP (2023), Kroc Institute (2021).

Las experiencias internacionales exitosas en consolidación de paz resaltan la importancia de la participación de la sociedad civil y la apropiación local de los procesos de seguridad. En Colombia, si bien se han impulsado espacios de diálogo, la construcción de confianza entre

las comunidades y las fuerzas de seguridad sigue siendo un reto, y la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas de seguridad no siempre es efectiva.

Por consiguiente, la experiencia internacional sugiere los modelos de seguridad integral exitosos donde existan articulaciones interinstitucionales, participación comunitaria real, reformas estructurales en el sector de la seguridad y el desarrollo económico e inversión en los países como las Naciones Unidas, la Unión Europea e Irlanda y el Salvador, aunado en lo anterior la implementación en Colombia enfrenta obstáculos estructurales, entre ellos: la persistencia de actores armados, la debilidad institucional en zonas rurales y la desconfianza ciudadana teniendo en cuenta que aun se presentan graves afectaciones a la paz en los territorios vulnerables por eso no basta con la voluntad política sino una coherencia estratégica y apropiación del estado nación para la implementación de políticas que se puedan mantener en el tiempo.

Tabla 2. Comparación enfoques estratégicos en Colombiana de Seguridad Integral Colombia vs. Experiencias Internacionales.

Criterio de Análisis	Colombia (Post Acuerdo 2016)	Naciones Unidas (Seguridad Humana)	Unión Europea (Balkanes)	Peacebuilding (Irlanda del Norte / El Salvador)
-----------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------	--

Objetivos estratégicos	Reintegración, presencia estatal integral, lucha contra economías ilícitas, confianza institucional. (estado y acción institucional	Erradicación de causas estructurales de violencia (pobreza, exclusión), fortalecimiento del Estado local. (amenazas estructurales)	Estabilización, reforma del sector seguridad, estado de derecho, crecimiento económico. (seguridad y desarrollo)	Reconciliación, memoria, justicia transicional, construcción de una cultura de paz desde las comunidades. (justicia transicional)
Énfasis en desarrollo económico	Enfoque localizado con enfoque rural, pero con limitaciones presupuestales y sostenibilidad a largo plazo.	Prioridad para garantizar condiciones mínimas de vida digna.	Intervenciones coordinadas con enfoque económico y social.	Apoyo económico focalizado, usualmente vinculado a iniciativas locales y de reconciliación.
Enfoque militar/policial	Multimisión: presencia territorial, desarrollo,	Secundario y limitado, centrado en	Parte de una estrategia integral con control civil.	Reformado profundamente, con enfoque en

	contención del crimen organizado.	desarme y reintegración.		confianza y legitimidad.
Resultados observados	Implementación parcial, avances en institucionalidad, pero con retrocesos en seguridad territorial.	Reducción de conflictos armados en varios casos, empoderamiento comunitario.	Consolidación institucional y reducción de violencia en la región.	Transformación progresiva del conflicto, aunque con retrocesos y tensiones persistentes.

Fuente: Elaboración propia con base en con base en el enfoque de seguridad humana del PNUD (1994), la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea (European Union, 2016), y los aportes de Lederach (1997) sobre peacebuilding, contrastados con el modelo de seguridad integral en Colombia tras el Acuerdo de Paz (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

El análisis cualitativo-comparativo evidencia que, si bien Colombia ha adoptado un modelo de seguridad integral tras el Acuerdo de Paz de 2016, su implementación ha sido fragmentada y enfrenta desafíos estructurales como la persistencia de grupos armados y la débil presencia estatal en zonas rurales. En contraste, las experiencias internacionales —como el enfoque de seguridad humana de la ONU, el modelo europeo de seguridad y desarrollo, y los procesos de peacebuilding— muestran que el éxito radica en una articulación efectiva entre

instituciones, participación comunitaria real, reforma del sector seguridad y un desarrollo económico inclusivo.

En conclusión, si bien Colombia ha avanzado hacia una comprensión más integral de la seguridad después del Acuerdo de Paz, la comparación con modelos internacionales sugiere que aún existen brechas significativas. La estrategia actual, aunque con elementos de seguridad integral, a menudo se inclina hacia una respuesta reactiva y de contención, en lugar de una proactiva que aborde de manera holística las causas profundas de la inseguridad. La integración efectiva de las dimensiones socioeconómicas, la mejora de la coordinación interinstitucional y el empoderamiento de la sociedad civil son áreas críticas donde la experiencia internacional podría ofrecer lecciones valiosas para fortalecer la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Propuestas basadas en evidencia empírica para optimizar la aplicación de la seguridad integral en Colombia.

Este modelo, adoptado tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, redefine la seguridad más allá de lo puramente militar, la necesidad de optimización surge de los desafíos persistentes, como la continuación de economías ilícitas (narcotráfico y minería ilegal), la adaptación de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC, ELN entre otros) y su control territorial, y la limitada presencia estatal en zonas rurales. Por lo tanto, las propuestas se basarían en la evaluación de estas realidades y en lecciones aprendidas para hacer la seguridad integral más eficaz en la consolidación de la paz y la estabilidad territorial.

Esta formulación de propuestas se centrará en los pilares de la seguridad integral: gobernanza y legitimidad local, desarrollo socioeconómico inclusivo, reforma del sector de seguridad y convivencia, y la coordinación interinstitucional y medición de impacto, integrando perspectivas de la Escuela Superior de Guerra de Colombia (ESDEG) y entidades internacionales.

Desafíos Persistentes en la Aplicación de la Seguridad Integral en Colombia.

La aplicación de un enfoque de seguridad integral en Colombia enfrenta varios retos estructurales y territoriales:

Persistencia y adaptación de GAO: A pesar del Acuerdo de Paz, grupos armados como disidencias de las FARC y el ELN han fortalecido su control territorial mediante el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esto limita la consolidación de presencia estatal y reduce la eficacia de programas de desarrollo local (Ulloa & Garay, 2019).

Economías ilícitas como motor de violencia: El narcotráfico continúa financiando la violencia; la falta de alternativas económicas legales incrementa la dependencia de las comunidades en cultivos ilícitos (UNODC, 2018; PNUD, 2017).

Vacíos de presencia institucional en zonas rurales: Regiones periféricas carecen de un acceso adecuado a justicia, salud, educación e infraestructura. La ausencia del Estado es aprovechada por las GAO, lo que perpetúa la desconfianza en las instituciones (Banco Mundial, 2011).

Fragmentación institucional y descoordinación: A pesar de marcos legales para la integralidad, la falta de articulación entre ministerios y entidades locales dificulta una respuesta coherente (SCJ Bogotá, 2024).

Desconfianza ciudadana y retos en convivencia: La histórica violencia ha erosionado la confianza entre comunidades y con el Estado. Los procesos de reconciliación son lentos y requieren atención sostenida (OECD, 2020).

Propuestas Basadas en Evidencia Empírica.

1. Reforzar la política y la gobernanza local legítima

El éxito en contextos posconflicto radica en mayor legitimidad estatal, la seguridad integral es, ante todo, un esfuerzo político y social, donde la acción militar es un medio para generar un entorno seguro para que otras medidas sean efectivas.

Es crucial fortalecer la legitimidad del gobierno en los territorios, abordando la desigualdad, la pobreza rural y la falta de equidad en la distribución de la tierra. Esto puede requerir reformas políticas sustantivas y la lucha contra la corrupción.

Las reformas deben basarse en las expectativas y necesidades locales, no en plantillas externas. Es fundamental fomentar la participación comunitaria y la apropiación local de los proyectos.

- Reforzar la formación continua de los miembros de la Fuerza Pública en estos principios, con énfasis en el trato a la población civil y la protección de líderes

sociales. La ESDEG, a través de sus cursos y seminarios (como el Diplomado en Memoria Histórica o seminarios con el CICR), ya sienta bases para esto.

2. Abordar economías ilícitas

El narcotráfico y la minería ilegal son la clave del conflicto y la persistencia de grupos armados. La estrategia debe concentrarse en los eslabones más fuertes de estas cadenas criminales y no solo en los cultivadores, a quienes se deben ofrecer opciones legales y desarrollo.

Es necesario integrar políticas efectivas para erradicar las economías ilícitas dentro del modelo de seguridad integral, promoviendo la reconversión social y económica de las regiones afectadas. Las cadenas criminales requieren atacar sus nodos centrales y no solo punir a los cultivadores (UNODC, 2018).

- Renegociar PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) con incentivos técnicos, productivos y acceso a mercados.

Fortalecer y hacer más eficientes los Programas Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), garantizando la entrega oportuna de incentivos y el acompañamiento técnico para proyectos productivos lícitos que sean rentables y sostenibles a largo plazo. La participación de las comunidades en el diseño de estos proyectos es clave (Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informes periódicos). Inteligencia económica para desarticular redes de lavado.

- Apoyo a infraestructura productiva local.

3. Fortalecer la presencia estatal integral

La seguridad integral exige una presencia estatal efectiva y sostenida en los territorios históricamente excluidos y afectados por el conflicto, lo cual implica ampliar los servicios estatales básicos (justicia, salud, educación, infraestructura, desarrollo económico), estos enmarcados en cada uno de sus actores directos desde los ministerios. Los Batallones de Ingenieros Militares pueden jugar un papel crucial en este aspecto, mejorando el acceso y desarrollo en zonas apartadas, de acuerdo a las necesidades que no han sido suplidas.

La provisión de servicios y desarrollo económico debe ser a pequeña escala y muy localizada, bien supervisada para evitar corrupción y diseñada para reforzar la inclusión, por ende, la reconstrucción del Estado en zonas vulnerables impulsa la paz (Banco Mundial, 2011).

- Estrategia de presencia estatal simultánea en sectores fundamentales.
- Impulsar proyectos de vías terciarias, almacenamiento, y acceso a créditos y mercados para los productos lícitos de las zonas rurales, reduciendo la dependencia de las economías ilegales
- Utilización de ingenieros militares para infraestructura dirigida.
- Control ciudadano sobre recursos transferidos.

4. Adaptación y profesionalización de la fuerza pública

Las Fuerzas Armadas deben continuar su adaptación doctrinal y operativa a un contexto post-acuerdo, donde su misión se extiende más allá del combate directo.

Es fundamental la formación en Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), integrando los estándares internacionales

en la legislación y práctica nacional. El respeto de los derechos humanos es crucial para la legitimidad de las acciones militares. Sin dejar de un lado su propósito misional y promover un ejército multimisión capaz de combinar tareas militares y policiales con contribuciones al desarrollo, apoyo a la consolidación territorial, atención a desastres y protección ambiental.

La protección de la fuerza debe equilibrarse con la necesidad de acercarse a la población para generar confianza y entender el entorno. Las fuerzas de seguridad deben tener un enfoque doctrinal en seguridad humana y derechos humanos (SIPRI, 2008).

- Capacitación continua en DIH, DD.HH. y trato diferencial (CICR & ESDEG, 2022).
- Desarrollo de policía comunitaria de proximidad. Implementar y evaluar de manera rigurosa modelos de policía comunitaria y de proximidad que fomenten la interacción positiva con la ciudadanía, la resolución de conflictos a nivel local y la recolección de información relevante para la prevención del delito. La Policía Nacional de Colombia ha explorado estas aproximaciones, pero se requiere mayor extensión y estandarización (Policía Nacional de Colombia, 2021, "Seguridad y convivencia ciudadana en Colombia: teorías, datos y estrategias aplicadas").
- Fuerzas armadas multimisión con énfasis en protección ambiental y atención a desastres.

5. Coordinación interagencial e integración institucional

La seguridad integral requiere una acción unificada y coordinación interagencial e interorganizacional de todos los instrumentos del poder nacional (político, de seguridad, económico y de información). Por consiguiente, esto implica un cambio en la cultura del sector público, superando la competencia interinstitucional. La creación de centros de fusión

de inteligencia regionales y la coordinación entre entidades es clave, por ende, la creación de nuevas divisiones en las FFMM, genera un mayor control en los territorios donde se realizan operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales e interagenciales.

La evaluación del progreso debe ir más allá de métricas de insumo (ej. número de escuelas construidas) y centrarse en indicadores de resultado que midan el efecto real y percibido sobre la seguridad y el bienestar de la población. Se necesitan encuestas periódicas para comprender las necesidades y hacer seguimiento al progreso. La coordinación es un factor clave en respuestas integrales exitosas (OECD, 2020).

- Instaurar el Consejo Nacional de Seguridad Integral.

Establecer un comité o consejo de seguridad integral que reúna a los Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Agricultura, Salud, Educación y el Departamento Nacional de Planeación, para coordinar de manera estratégica y operativa las políticas y proyectos de seguridad integral.

- Centros de inteligencia regional georreferenciada (SCJ Bogotá, 2024).

Desarrollar una plataforma que integre datos sobre delitos, presencia de GAO, inversión social, indicadores de desarrollo, y percepciones de seguridad y convivencia. Esto permitirá identificar patrones, focalizar recursos y evaluar el impacto de las intervenciones de manera precisa. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá ya realiza diagnósticos basados en datos para sus planes de seguridad (SCJ Bogotá, 2024, "PISCCJ Bogotá Camina Segura").

6. Sostenibilidad del posconflicto y reintegración

La implementación rigurosa de los acuerdos de paz es esencial para evitar el desencanto y la frustración. La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles (paz negativa), sino también el restablecimiento pleno del estado de derecho y la construcción de una sociedad más justa y armoniosa (paz positiva).

Se requiere una política de seguridad consistente para el posconflicto que evite el desmantelamiento de los aparatos de seguridad del Estado y asegure programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) bien planificados para evitar la reincidencia en la criminalidad, donde se amplie y agilice la ejecución de proyectos de infraestructura, saneamiento básico, electrificación y conectividad en estos territorios, priorizando aquellos con mayor rezago. La evidencia indica que el desarrollo económico y social es un disuasivo para la vinculación a grupos armados (PNUD, 2017, "Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2017").

La sostenibilidad de la seguridad integral en Colombia exige decisiones políticas coherentes, inversión sostenida y una presencia estatal efectiva en los territorios sin desconocer los daños ocasionados a la población y a los territorios. Al integrar estos principios y lecciones aprendidas, Colombia puede construir un modelo de seguridad multidimensional que combine la defensa nacional con el desarrollo humano y la cooperación internacional, superando los desafíos persistentes y consolidando una paz estable y duradera.

La reincorporación sin inclusión económica y social marginaliza a excombatientes (OECD, 2020).

- Fortalecer el DDR con enfoque psicosocial.

- Programas de paz positiva (cultura, memoria histórica y participación política).

Tabla 2. Resumen de formulación de estrategias propuestas basadas en evidencia empírica para optimizar la aplicación de la seguridad integral en Colombia.

Eje Estratégico	Propuesta	Responsable(s)
Gobernanza y legitimidad	Participación comunitaria, enfoque territorial, combate a la corrupción (PNUD, 2017).	DNP, gobernaciones, ONG's, liderazgos locales
Economías ilícitas	Fortalecer PNIS, inteligencia económica, infraestructura rural	PNIS, UNODC, MinAgricultura, Fiscalía
Presencia estatal integral	Estrategia integral estatal coordinada, control ciudadano, proyectos dirigidos	ART, MinInterior, DNP, Batallones de Ingeniería
Reforma sector seguridad	Capacitación DD.HH./DIH, policía comunitaria, ejército multimisión	Policía Nacional, FFMM
Coordinación interinstitucional	Consejo Nacional de SI, centros de inteligencia regional	Presidencia, DNP, MinDefensa, MinInterior, sector privado y ONG

Evaluación y monitoreo	Plataforma georreferenciada, evaluaciones externas y participación comunitaria	DNP, DANE, SCJ Bogotá, universidades
Sostenibilidad del posconflicto	Fortalecer DDR y promoción de paz positiva	Agencia para la Reincorporación, DDHH, pescadores, Ministerio Cultura

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIÓN:

La búsqueda de una seguridad integral en Colombia, post-Acuerdo de Paz de 2016, representa un imperativo estratégico y un desafío complejo. Este artículo ha abordado el objetivo general de analizar comparativamente la estrategia de seguridad implementada en Colombia con modelos internacionales, con el fin de extraer lecciones que optimicen su aplicación. Para ello, se desarrolló la evaluación del impacto de la redefinición de la política de seguridad nacional, es una comparación rigurosa con experiencias globales en conflictos similares, y la formulación de propuestas basadas en evidencia empírica.

Como primer objetivo, se examinó el impacto de la firma de los acuerdos de paz con las antiguas FARC en redefinición de la política de seguridad nacional. Se evidenció un cambio paradigmático crucial: la seguridad evolucionó de una visión predominantemente militarista, encarnada en la "Seguridad Democrática" (Uribe Vélez, 2003; Restrepo, 2009), hacia un concepto más amplio y multidimensional que busca integrar aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales (Ministerio de Defensa Nacional, 2022; González Posso, 2020).

Esta transformación busca abordar las causas estructurales del conflicto y no solo sus manifestaciones armadas (Comisión de la Verdad, 2022). Sin embargo, a pesar de los avances normativos y la creación de mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), la implementación práctica ha enfrentado desafíos persistentes. La reconfiguración y adaptación de grupos armados organizados (GAO) y el arraigo de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal (Sánchez, 2021; Kroc Institute, 2023) han puesto en jaque la consolidación de este modelo, demostrando que la retórica de integralidad aún lucha por materializarse plenamente en los territorios, esto a razón de las garantías tanto para los actores armados y la población víctima de ello. La sostenibilidad de esta redefinición depende de una voluntad política constante, una inversión sostenida y una articulación interinstitucional efectiva que vaya más allá de la mera contención militar de la violencia.

El segundo objetivo se centró en comparar la estrategia actual con modelos de seguridad integral utilizados en otros países con conflictos similares. Esta comparación crítica, que incluyó enfoques como la Seguridad Humana promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) en contextos como Sierra Leona, la integración de seguridad y desarrollo impulsada por la Unión Europea en los Balcanes (European Union, 2016), y los modelos de peacebuilding aplicados en Irlanda del Norte y El Salvador (Lederach, 1997), ofreció un espejo crítico.

Los modelos mencionados subrayan consistentemente la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia —pobreza, desigualdad, exclusión y demás que afectan los territorios alejados— con el mismo ímpetu que las manifestaciones directas del conflicto.

La experiencia colombiana, aunque con esfuerzos notables como los PDET, aún lucha por traducir esa integralidad teórica en una acción estatal coordinada, eficiente y visible en cada rincón del territorio. La fragmentación institucional y la persistente desconfianza ciudadana en algunas regiones son indicadores de que, a pesar de las buenas intenciones y el reconocimiento de la multidimensionalidad de las amenazas por parte de algunas entidades (Ruiz Barrera, 2017), el enfoque no ha permeado completamente todas las capas de la sociedad y del Estado. La comparación resalta la necesidad de un mayor énfasis en la prevención, la construcción de confianza comunitaria y una genuina inclusión social.

Como tercer objetivo, y fundamental para la aplicabilidad de este estudio, se procedió a formular propuestas basadas en evidencia empírica para optimizar la aplicación de la seguridad integral en Colombia. La evidencia empírica, tanto nacional como internacional, señala caminos claros para esta optimización. Es fundamental fortalecer la presencia estatal inteligente y adaptativa, lo que implica una inversión acelerada en infraestructura social y productiva, así como en el fortalecimiento de la justicia local y comunitaria (Banco Mundial, 2011). Como se ha argumentado, una presencia estatal robusta y cercana es un pilar fundamental para erradicar los vacíos de poder aprovechados por la criminalidad y consolidar la gobernanza legítima (PNUD, 2017).

Asimismo, la desarticulación de las economías ilícitas debe ir más allá de la mera erradicación. Se requiere una estrategia integral de contención y transformación económica que incentive la sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos lícitos y sostenibles, complementada con una lucha más eficaz contra el lavado de activos y el control de las cadenas de suministro ilegales (UNODC, 2018). Esta aproximación es crucial, ya que

la dependencia económica de actividades ilícitas es un factor persistente y un motor clave en la dinámica de la violencia.

Finalmente, la reforma del sector de seguridad y la profundización de un enfoque de seguridad humana en la fuerza pública son imprescindibles. La capacitación continua en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), junto con la implementación de modelos de policía comunitaria y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, son pasos esenciales para reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de su protección (SIPRI, 2008; Policía Nacional de Colombia, 2021). En conclusión, la optimización de la seguridad integral en Colombia exige un compromiso inquebrantable con la articulación interinstitucional efectiva, la focalización estratégica de recursos en las zonas más afectadas y la participación activa y genuina de las comunidades. Solo mediante una estrategia cohesiva y basada en datos, que aborde tanto las amenazas inmediatas como las causas estructurales subyacentes, podrá Colombia transitar hacia una paz verdaderamente estable, sostenible y duradera.

BIBLIOGRAFIA:

- Alto Comisionado para la Paz. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Gobierno de Colombia.
- Ayala, J. (2018). La interdicción marítima: Un factor decisivo para la seguridad del Estado en el conflicto armado. *Revista de la ESDEG*.
- Banco Mundial. (2011). Justicia para todos: Informe sobre el desarrollo mundial 2011. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.
- Call, C. T. (2002). Democratisation, War and State-Building: Constructing the Rule of Law in El Salvador. *Journal of Latin American Studies*, 34(3), 687-716.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2020). La persistencia del conflicto armado en Colombia. Bogotá: CNMH.
- CNMH – Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.
- Comisión de la Verdad. (2022). Hay Futuro si hay Verdad: Informe Final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
- European Union. (2016). Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea.
- FIP – Fundación Ideas para la Paz. (2020). El rol de las Fuerzas Armadas en el pos acuerdo. Bogotá: FIP.
- FIP – Fundación Ideas para la Paz. (2023). Territorios en disputa: disputas armadas y control ilegal. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2020). Balance de la Implementación del Acuerdo de Paz: Rol de la Fuerza Pública.
- González Posso, R. (2020). La seguridad como derecho humano: evolución y perspectivas. *Revista Análisis Político*, (100), 113–132.
- González, F. (2004). Poder y violencia en Colombia. CINEP.
- Gutiérrez Sanín, F. (2021). ¿Una paz esquiva? Poder, territorio y conflicto armado. Editorial Universidad Nacional.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

- Gutiérrez, F. (2003). *La violencia política en Colombia: De la autodefensa a los grupos paramilitares*. Bogotá: IEPRI-UNAL.
- Hernández, L. A. (2020). La evolución de la política de seguridad en Colombia: Entre la Seguridad Democrática y la seguridad integral. *Revista Seguridad y Defensa*, 15(2), 23–44.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2021). *Quinto informe sobre el estado de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*. Universidad de Notre Dame.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2022). *Cuarto informe sobre el estado de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*. University of Notre Dame.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2023). *Fifth report on the status of peace accord implementation in Colombia*. University of Notre Dame.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2023). *Informe de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*. University of Notre Dame.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2023). *Quinto Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*. Universidad de Notre Dame.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Ministerio de Defensa Nacional. (2022). *Política de Seguridad y Defensa 2022–2026*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Misión de Verificación de la ONU en Colombia. (Informes periódicos). *Informes del Secretario General al Consejo de Seguridad*. Naciones Unidas.
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2023). *Informe anual sobre cultivos ilícitos y narcotráfico*. Bogotá: Ministerio de Justicia.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2018). *World Drug Report 2018*. UNODC.
- ONU- Organización de Naciones Unidas. (2024). *Informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia*. Naciones Unidas.
- Ospina, D. (2018). *Más allá del fin del conflicto: Seguridad integral y construcción de paz en Colombia*. Fundación Friedrich Ebert en Colombia.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

- Pearce, J. (2012). Seguridad ciudadana y construcción de paz en contextos de violencia. London School of Economics.
- Pécaut, D. (2017). Colombia: Entre la violencia y la esperanza. Bogotá: Editorial Norma.
- Pizarro, E. (1991). Las FARC: De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Policía Nacional de Colombia. (2021). Seguridad y convivencia ciudadana en Colombia: teorías, datos y estrategias aplicadas. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1994). Informe sobre Desarrollo Humano 1994: Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana. Oxford University Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2017: "Colombia Rural: Razones para la esperanza". PNUD Colombia.
- Restrepo, J. (2009). Seguridad Democrática y conflicto armado. Fundación Seguridad & Democracia.
- Restrepo, L. A. (2009). Seguridad Democrática: El modelo de Uribe. Planeta.
- Ruiz Barrera, J. (2017). La Seguridad Nacional en el Posconflicto. Revista de la ESDEG
- Sánchez, F. (2021). Economías ilícitas y reconfiguración del conflicto en el posacuerdo. Cede - Universidad de los Andes.
- Sánchez, G. (2021). Seguridad y Estado en Colombia: Retos de la posguerra. Universidad de los Andes.
- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ Bogotá). (2024). PISCCJ Bogotá Camina Segura. Alcaldía Mayor de Bogotá.
- SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). (2008). Security Sector Reform: A Guide to the Process. SIPRI.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2008). Security Sector Reform: A Guide to the Process. SIPRI.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). (2018). World Drug Report 2018. Naciones Unidas.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Uribe Vélez, A. (2003). Política de Seguridad Democrática. Presidencia de la República de Colombia.